



INFORME DE CONTEXTO FRONTERIZO

INFORME 8

A G O S T O - 2 0 2 1

INTRODUCCIÓN

Informe de Contexto Fronterizo

Diversas situaciones generadas durante el mes de agosto de 2021 han contribuido a profundizar aún más la emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos, quienes desenvuelven su cotidianidad en medio de la supremacía de las bandas criminales sobre las instituciones establecidas, la indefensión alimentaria, el precario accesos a servicios de salud y educación de calidad, así como la ausencia casi absoluta de servicios públicos indispensables tales como gas doméstico, agua o transporte, situaciones que impulsan una migración forzada que bordea ya los seis millones de personas, posicionándose como la más alta del mundo.

El monitoreo constante realizado por FundaRedes en los estados fronterizos Zulia, Táchira, Amazonas, Bolívar, Apure y Falcón, así como el seguimiento a hechos relevantes en todo el territorio nacional, permiten evidenciar que las emergencias generadas por las lluvias, aunadas al anuncio de implementación de nuevas medidas económicas, han incrementado la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos del pueblo venezolano, mientras los grupos armados irregulares y algunos integrantes de la oficialidad venezolana se reparten el control de los territorios fronterizos en medio de enfrentamientos y acciones que van en detrimento de la población civil. En estas situaciones, son las etnias indígenas de Apure, Amazonas y Bolívar las que llevan la peor parte.

Viejas prácticas extorsivas son retomadas bajo nuevas modalidades ajustadas a la realidad hiperinflacionaria del país, lo que lleva a que los secuestros ocurridos en los territorios del sur comiencen a involucrar exigencias de pagos en oro para el rescate de las víctimas.



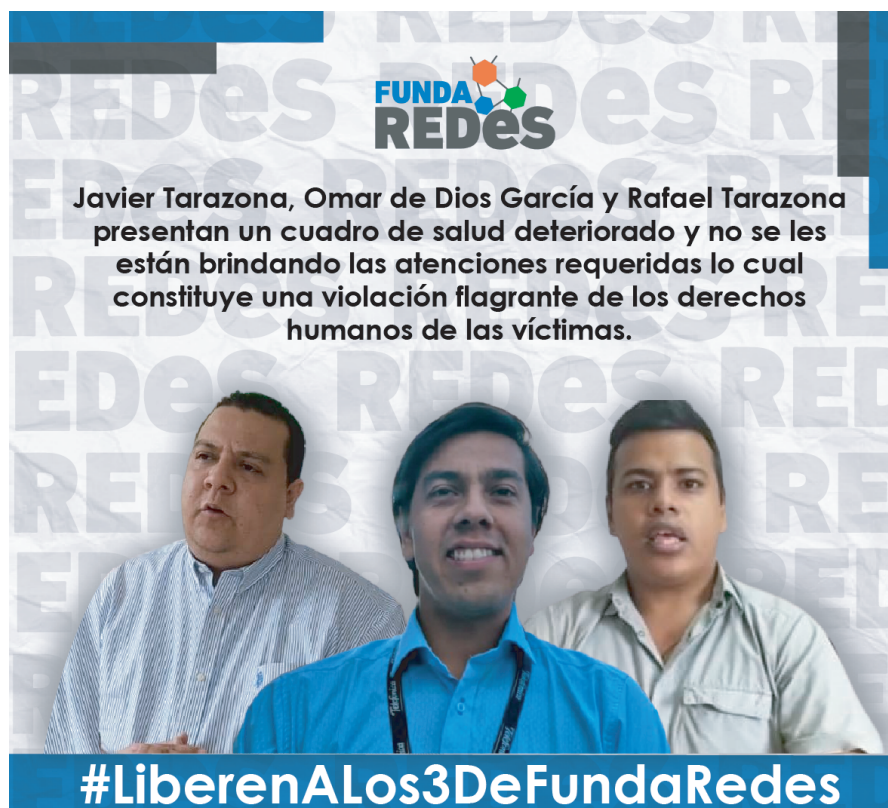
La conflictividad por el control de los negocios ilícitos se agudiza e involucra nuevos actores. Bandas delincuenciales con alto poder de fuego pugnan contra las guerrillas tradicionales para abrirse paso a través de las fronteras.

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Un importante incremento de la violencia y la criminalidad reveló la labor de monitoreo realizada en los estados Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia durante el octavo mes del año.

Homicidios, secuestros, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, actividades relacionadas con el narcotráfico, esclavitud moderna, enfrentamientos entre bandas criminales y agrupaciones guerrilleras por el control del territorio y la minería ilegal, atentados contra el medio ambiente y abuso de poder contra la población indígena, constituyen los principales hechos acaecidos durante el mes de agosto.

A más de dos meses de la detención arbitraria de activistas de FundaRedes, familiares señalan que no han tenido comunicación con los detenidos, quienes presentan un cuadro de salud deteriorado y no se les están brindando las atenciones requeridas, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos humanos de las víctimas.



La incursión de los Grupos Armados Irregulares en aquellas entidades donde la presencia y actuación por parte del Estado venezolano es casi imperceptible, se hace evidente cada día; estos grupos terroristas se han adueñado prácticamente del territorio, ante la mirada indiferente de las autoridades, tal es el caso de Apure, Amazonas y Bolívar.

Como evidencia de ello, la revista colombiana Semana, reveló archivos encontrados en la computadora del guerrillero Gentil Duarte, uno de los más peligrosos jefes de las disidencias de las Farc, incautada en la operación San Miguel V, los cuales confirman la relación de esta agrupación terrorista con el gobierno de Nicolás Maduro.

En lo militar los datos son específicos, las disidencias de las Farc le solicitan al Gobierno venezolano “permita la permanencia y tránsito por el territorio de frontera de los distintos estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, cumpliendo con los protocolos, rutas y mecanismos que se acuerden entre las partes preservando los principios de clandestinidad y de seguridad nacional para el desarrollo conjunto de operaciones”.

Para el grupo armado, resulta “fundamental fortalecer y priorizar el trabajo de Venezuela ya que se logra un enlace directo con sectores de confianza con el actual presidente”, a quien le piden “5.000 fusiles, 500 ametralladoras punto 30 o punto 50, morteros de 60 milímetros, sistemas antitanques, sistemas nocturnos, armas cortas, municiones para estas armas, granadas de manos, sistemas antiaéreos tierra-aire portátiles o de infantería, y lo relacionado con dotaciones de combustible (intendencia)”.

En el marco de la elecciones primarias del PSUV, la población indígena fue manipulada y vulnerados sus derechos fundamentales en cuanto a la alimentación y el sufragio.



Se estima que alrededor de 28 comunidades indígenas han dejado de trabajar en turismo ante el cierre del estado y la escasez de gasolina. Una investigación realizada por la Cámara de Turismo del estado Bolívar determinó que 60% de los indígenas que se dedicaban al turismo ahora practican la

minería ilegal. Desde inicios de la pandemia, en Bolívar cerraron aeropuertos y la frontera. Luego de más de un año y medio, la entidad sigue sufriendo fuertes restricciones que impiden el turismo y obligan a comunidades indígenas de Santa Elena de Uairén a practicar la minería.

Algunas entidades como Falcón, Apure y Táchira constituyen puntos fronterizos estratégicos para el accionar de bandas criminales dedicadas al tráfico humano. Las víctimas son captadas bajo engaño, pues luego de ser contactadas con falsas promesas de trabajo, son inducidas mediante la intimidación y amenazas, a la práctica de la prostitución.

Pese a las restricciones impuestas por la pandemia, la migración continúa su curso y según datos aportados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre 700 y 900 personas huyen diariamente de Venezuela pese al cierre de fronteras terrestres imperante, debido a la pandemia de covid-19.

La presencia de grupos irregulares en la frontera sigue siendo una constante, y ello ha significado un gran problema para los productores agropecuarios, quienes han visto afectada su seguridad personal y la de sus fincas.

Todas estas situaciones requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:

APURE

Los enfrentamientos entre la FARC-EP y el tren de Aragua por el control del territorio y las actividades ilícitas no cesan, el "plan pistola" establecido por el grupo disidente ha cobrado la vida de al menos 12 personas, entre ellas los jefes de dos de las bandas en pugna en los límites de Venezuela y Colombia, en el estado Apure, fueron asesinados en esta sección de la frontera.

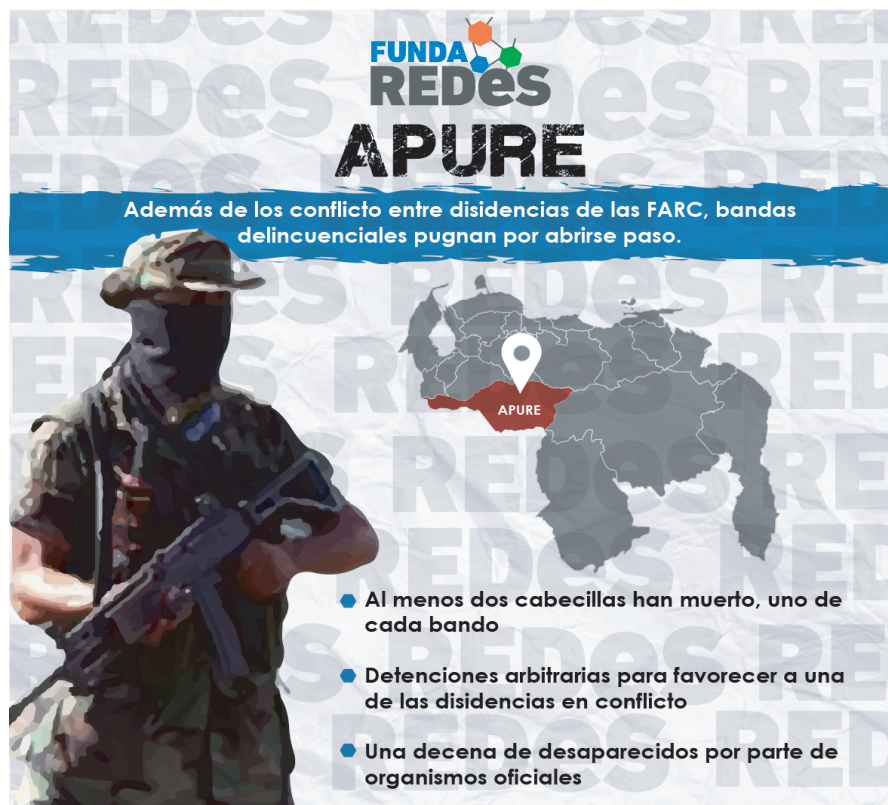
Por la parte de las disidencias de las FARC cayó José Leonardo Guerrero, alias el Mono, asesinado el 3 de agosto en un tiroteo en el río Arauca, y el martes 17 fue acribillado Darwin Rafael González Castillo, conocido como el Enano, jefe del Tren de Aragua.

A raíz de ello se desató una guerra entre ambas organizaciones criminales en la frontera del departamento de Arauca, Colombia, con el estado Apure, Venezuela. De acuerdo con testimonios de habitantes de El Amparo, comenzaron a aparecer "entre dos, tres y más" hombres asesinados en la orilla colombiana del río Arauca.

Adicionalmente, se han suscitado varias detenciones arbitrarias tanto de civiles y militares por su presunta vinculación con Grupos Armados Irregulares, en el marco de la ofensiva implementada por la fuerza armada contra las disidencias de las FARC. Asimismo han denunciado la desaparición de una decena de ciudadanos que fueron detenidos por la DGCIM.

Durante los días previos a las elecciones primarias del PSUV en Apure, se evidenciaron presiones sobre la población indígena cuyos derechos fundamentales a alimentación y al sufragio fueron vulnerados.

Cabe destacar que no sólo las FARC operan en Apure, también existe la presencia del FBL, ELN y bandas como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, en las zonas donde se disputan control de territorio, especialmente entre la Macanilla y la Victoria.



AMAZONAS

La población indígena es la más afectada, no solo por la emergencia humanitaria compleja que ha acrecentado la falta de servicios públicos y de salud, sino por la cantidad de vicisitudes que tienen que enfrentar para sobrevivir y que la ha hecho presa fácil de los depredadores sociales.

Las invasiones de territorios ancestrales por parte de grupos armados irregulares y el fenómeno de migración forzada siguen creciendo. Los indígenas están emigrando en las peores condiciones de vulnerabilidad, trasladándose en medio de la clandestinidad y a merced de redes delincuenciales, exponiéndose a todo tipo de riesgos como caer en cadenas de extorsión o incluso de esclavitud moderna.

Varias organizaciones y líderes tribales denunciaron ante las autoridades, la presencia de unos 400 mineros brasileños armados, conocidos como garimpeiros, quienes tienen sometidos y esclavizados a indígenas del pueblo sanemá en Amazonas desde hace aproximadamente 3 años.

Sumado a esto la etnia afronta enfermedades por malaria, desnutrición, tuberculosis y contaminación con mercurio, dado el alto impacto de la minería ilegal en la zona.

Hay desplazamiento de etnias indígenas hacia las fronteras de Colombia y Brasil, alcabalas controladas por el ELN en pasos fluviales hacia las minas, especialmente en el cerro Yapacana que a juzgar por la evidente opacidad y omisión oficial, cuentan con apoyo de la oficialidad venezolana para realizar esta y otras actividades ilícitas.

La presencia y actuación de grupos irregulares armados provenientes de Colombia y Brasil en territorios del estado Amazonas, es una de las más determinantes causas del deterioro de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.



BOLÍVAR

Se registra un elevado índice de criminalidad y violencia, que ubica a la entidad en el primer lugar de asesinatos, desapariciones y secuestros y el segundo lugar en enfrentamientos a lo largo de la frontera venezolana. La proliferación de bandas criminales se acentúa en algunos municipios de la entidad, entre las que figuran la banda "los Yovis", la banda "La Margarita" y "Los Garimpeiros", las cuales vienen desarrollando diversas actividades ilícitas como extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto y asesinatos, hechos que mantienen en zozobra a la comunidad.

Igualmente, durante el mes de agosto se incrementaron los casos de violencia de género, lapso durante el cual esta entidad contabiliza varios feminicidios.

En lo que va de año se han registrado al menos tres secuestros a comerciantes en el municipio El Callao, al sur de la entidad. El caso más reciente es el del comerciante de 20 años de edad, Juber Nasser, raptado la mañana del martes 10 de agosto en las inmediaciones de la plaza Bolívar.

Las poblaciones indígenas se han visto afectadas por las lluvias que han azotado a la entidad desde

hace varias semanas, por lo que la Asociación Civil Kapé-Kapé alertó sobre un brote de enfermedades en tres comunidades indígenas del delta medio del Orinoco, tras las inundaciones ocasionadas y la crecida de los ríos.

El rapto y la explotación infantil han cobrado auge, seis niños fueron reportados como desaparecidos sólo este mes. Se señala a la banda “Los Puri Puri”, de estar dedicada a someter niños que encuentra solos en la calle, para tenerlos como esclavos picadores de chatarra. Estos niños fueron rescatados y dos personas, propietarias de la casa donde estaban los niños y que funcionaba como depósito de materiales robados, fueron detenidas.



FALCÓN

Las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas acentúan su accionar en las costas venezolanas, para afianzar sus relaciones criminales con las islas del Caribe. Este mes cuatro personas fueron condenadas a cuatro años de prisión por pertenecer a una red de tráfico y explotación sexual, la cual captaba en falcón, personas principalmente de sexo femenino que posteriormente eran vendidas en Curazao.

TÁCHIRA

Aquí convergen diversos factores que incentivan la presencia de grupos delincuenciales de alto poder y otros de menor incidencia en esta zona de la frontera que actúan de manera indiscriminada bajo la indiferencia y complicidad de las autoridades venezolanas, que recién comienzan a investigar tales situaciones.



En este sentido, la investigación sobre el tráfico de personas con fines de explotación sexual, extorsión y secuestro, que es adelantada por el Ministerio Público, se ha extendido esta entidad, por tratarse de uno de los puntos utilizados para el traslado de las víctimas al exterior.

Debido a la migración venezolana que ha utilizado al Táchira para salir del país o para quedarse en Táchira, se han registrado casos de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, violencia a la mujer y un crecimiento en las bandas delictivas, que desde el interior del país se han dedicado a captar niñas y adolescentes, engañándolas con supuestos trabajos en Táchira o en Cúcuta.

El paso de niños por las trochas implica una serie de riesgos, entre ellos, el de la explotación laboral y sexual por parte de organizaciones dedicadas a la trata de personas.

Además se registra un incremento en las cifras de homicidios, casos de violencia de género, actividades relacionadas con el narcotráfico, entre otros delitos. Un total de 10 hombres son buscados actualmente por los cuerpos de seguridad con presencia en Táchira, por estar presuntamente involucrados en casos de homicidio.

Dos personas reportadas como secuestradas tras ser llevadas de sus hogares por hombres armados que se identificaron como integrantes de organizaciones guerrilleras fueron hallados muertos por arma de fuego algunos días después.

La presencia de irregulares constituye una amenaza para los propietarios de fincas productivas, cuyos

espacios son ocupados por hombres armados que cobran por “garantizar la seguridad” de los propietarios y trabajadores, así como de sus bienes.

El municipio García de Hevia viene registrando en los últimos tiempos hechos de violencia y criminalidad siendo epicentro de desapariciones forzosas y actuaciones de la guerrilla y grupos al margen de la ley.

ZULIA

El narcotráfico y el contrabando han incrementado sus operaciones en la región zuliana y el poderío de los grupos delincuenciales se afianza cada día más, sumergiendo a este estado en la violencia y la criminalidad.

Zulia se ubica como la segunda entidad más violenta de la región fronteriza de Venezuela, corredor para la entrada y salida de materia prima y droga procesada. En el territorio hay presencia de megabandas, redes criminales y grupos armados irregulares.

Los grupos delincuenciales con gran poder territorial accionan sin ningún tipo de seguimiento y acción por parte de los cuerpos de seguridad del Estado; enfrentamientos entre bandas por disputas de territorios se registran en diferentes sectores, donde se siguen reportando extorsiones, asesinatos, actuaciones de grupos armados, robos y secuestros. A estas actividades se han sumado algunos miembros de la comunidad yukpa, convertidos en banda delincencial.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

La labor de monitoreo y seguimiento realizado por FundaRedes en las regiones fronterizas confirma la condición de indefensión en que se encuentra los ciudadanos ante la inacción estatal frente a la constante transgresión del derecho a la vida, a la integridad personal, al trabajo, a la prohibición de desaparición forzada de personas, derecho al debido proceso, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a un ambiente sano, entre otros.

La emergencia humanitaria, y la vulnerabilidad económica existente en Venezuela, facilitan que organizaciones criminales puedan captar mujeres a las que ofrecen trabajar en otro país con importantes ingresos económicos, y las que posteriormente resultan víctimas de trata, esclavitud y explotación sexual. Resulta imperativo pedir al Estado venezolano, que se haga responsable de la situación de los migrantes y que promueva políticas efectivas que otorguen seguridad y garantía a quienes se van del país.

Miembros de algunas comunidades indígenas (yukpas) se han armado y organizado para actuar como bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, el asesinato y el robo, entre otros delitos. Esta situación lleva a la estigmatización generalizada contra las etnias indígenas y posibles confrontaciones ciudadanas e incluso el nacimiento de fuerzas paramilitares y parapoliciales apoyadas en bandas delincuenciales con alto poder de fuego.

La invasión de fincas, la presencia de grupos irregulares y los altos niveles de inseguridad en los estados fronterizos han causado el éxodo de productores agropecuarios, en medio de un aumento

criminal permanente contra la producción y los productores, lo que trae consigo riesgos de extorsión, secuestro, violaciones a esposas e hijas, así como niños y ancianos vejados. Se eleva el nivel de indefensión y angustia de los productores –especialmente en Apure-, lo que hace que el campo se encuentre en emergencia, poniendo en riesgo a mediano y largo plazo la solidez de la producción alimentaria nacional.

En los territorios de frontera cobra fuerza una subcultura de aceptación social a grupos delincuenciales, ya que sustituyen al Estado en los territorios donde operan, frente a la ruptura institucional de la administración pública en Venezuela y la compra de funcionarios militares por parte de los grupos delictivos, lo que ha creado un ambiente propicio para el crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales, favoreciendo el narcotráfico y la trata de personas.

El Estado tiene la obligación de hacer frente a la inestable confluencia de grupos armados ilegales en las fronteras, que tienen alianzas y disputas entre sí, las cuales afectan significativamente a las poblaciones y a los migrantes. Sin embargo, desde las altas esferas del poder existen alianzas y se propugna la protección a estos grupos terroristas y criminales que tanto afectan la estabilidad de los venezolanos.

Por otro lado, las personas que denuncian, exigen derechos y garantías, aquellos que informan, reportan o se expresan a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales y quienes en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país trabajan para mitigar el sufrimiento de la población, se han convertido en las principales víctimas de la persecución y la criminalización por parte de los representantes del Estado, quienes mediante el ejercicio de una política que les permita su perpetuación en el poder, han asumido un control total sobre el aparato estatal y silenciado a todos los actores que según un criterio muy particular, constituyan una amenaza a sus objetivos.

El modus operandi de los grupos delincuenciales dedicados al secuestro y extorsión se adaptan a la realidad hiperinflacionaria del país, exigen pagos en dólares, oro o criptomonedas, recursos que pocas veces están al alcance de las familias de las víctimas, que en algunos casos desaparecen o son asesinados debido a la falta de pago.

La cercanía del proceso electoral y el evidente compromiso de los grupos armados con algunos candidatos o tendencias, exagera las amenazas y hechos de violencia en contra de dirigentes opositores, sus viviendas e incluso sus familiares cercanos. De igual forma se evidenciaron presiones por parte de los GAI a grupos poblacionales para direccionar su comportamiento electoral, así como la oferta de bienes y servicios como alimentos, combustible y gas doméstico.

Por años, estos grupos han mantenido injerencia dentro de elecciones y en el Partido Socialista Unido de Venezuela para mantener el control de territorio para actividades de contrabando y narcotráfico, que son manejados en zonas estratégicas de la frontera. Ello se evidencia especialmente en Apure, donde Pedro Leal y Ramón Carrizalez mantienen permanente relación con las FARC; así como José María Romero, alias "Chema" quién es parte del FBL a través de quienes controla, amenaza y somete a la población.